

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

La Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, regula en su Título VII el Consejo de la Guardia Civil, un órgano colegiado en el que participarán representantes de las personas que componen la Guardia Civil y representantes de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de los Guardias Civiles, como el funcionamiento del propio Instituto.

El proyecto remitido procede a dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 55 de la citada ley orgánica, que determina que mediante Real Decreto se establecerá el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, actualizando la regulación contenida en el Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, al cual sustituye.

## I

De la regulación contenida en el proyecto y en cuanto pueda afectar al derecho fundamental a la protección de los datos personales de las personas físicas, interesa destacar el régimen aplicable al derecho de acceso a la información por los miembros del Consejo de la Guardia Civil previsto en el artículo 9.

En el momento actual, en lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la normativa a la que debe ajustarse el proyecto sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

(Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

En atención al principio de licitud del tratamiento recogido en el artículo 5.1.a) del RGPD, debe partirse de lo señalado en nuestro Informe 175/2018, respecto de la legitimidad de los tratamientos de datos personales por las Administraciones Públicas:

Como CONCLUSIÓN en este punto, cabe decir que, con carácter general, la base jurídica del tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de equilibrio entre el responsable del tratamiento (la Administración), y el interesado (el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según los casos, el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD) o el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD).

En el presente caso, los posibles tratamientos de datos personales que se contengan en la información a la que tengan acceso los miembros del Consejo de la Guardia Civil, derivarían de la necesidad de acceder a los mismos para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, tal y como se reconoce con carácter general en el apartado 1 del precepto:

“1. Los vocales del Consejo tendrán derecho a acceder a la información que precisen, y que sea de utilidad, para poder desarrollar sus funciones en las diversas reuniones del pleno y comisiones”.

Se trata, por consiguiente, de tratamientos de datos personales que, en las condiciones que posteriormente se expondrán, se encontrarían legitimados por lo previsto en el artículo 6.1.e) del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”), siempre que sean necesarios para el ejercicio de las funciones que la La Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil y, en su caso, otras normas con rango legal, atribuyen al Consejo de la Guardia Civil, cumpliéndose, de este modo, con el requisito de reserva de ley establecido en el artículo 8.2. de la LOPDGDD (“2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”)

Por el contrario, no es apreciable, en el presente caso, la concurrencia de la obligación legal a la que se refiere el artículo 6.1.c) del RGPD y que exige, conforme al artículo 8.1. de la LOPDGDD que así lo prevea una norma con rango de ley, no encontrándose el derecho de acceso a la información entre los previstos en el artículo 57 de la Ley Orgánica 11/2007, sino que se trata de un derecho reconocido en el proyecto de real decreto en cuanto norma reglamentaria que desarrolla las previsiones de la citada Ley Orgánica.

Por otro lado, debe hacerse especial mención al supuesto específicamente contemplado por el artículo 64 de la Ley Orgánica 12/2007, referido a la preceptiva emisión de informe respecto de los expedientes disciplinarios instruidos por faltas graves o muy graves a miembros del Consejo de la Guardia Civil, ya que puede implicar el tratamiento de datos personales referidos a infracciones administrativas, que son objeto de regulación específica en el artículo 27 de la LOPDGDD:

Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.

1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá:

a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel.

2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

En el presente caso, el tratamiento se ampararía en lo previsto en el apartado 2 del artículo 27 de la LOPDGDD, al estar autorizados por una norma con rango de ley.

Por otro lado, cualquier tratamiento de datos personales deberá cumplir, igualmente, con el resto de principios recogidos en el artículo 5 del RGPD:

1. Los datos personales serán:

- a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
- b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
- c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
- d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
- e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
- f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

A los efectos del presente informe, interesa destacar especialmente los principios de limitación de la finalidad y de minimización de datos, unidos al requisito de la necesidad del tratamiento previsto en el artículo 6.1.e) y la doctrina sobre la proporcionalidad sentada por el Tribunal Constitucional y que resume en su Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:

“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de

derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [ RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo [ RTC 1996, 55] , FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre [ RTC 1996, 270] , F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero [ RTC 1998, 37] , F. 8; 186/2000, de 10 de julio [ RTC 2000, 186] , F. 6).”

Conforme a los citados principios, el acceso a los datos personales contenidos en la información que se facilite a los miembros del Consejo de la Guardia Civil deberá restringirse a aquellos supuestos en que sea estrictamente necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones, limitándose a los datos mínimos y sin que puedan utilizarse para una finalidad incompatible con el fin para el que se facilitaron.

Sin perjuicio del informe preceptivo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica 12/2007, las funciones del Consejo de Personal se recogen en el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007:

Artículo 54. Funciones del Consejo.

El Consejo de la Guardia Civil tendrá las siguientes facultades:

1. Tener conocimiento y ser oído previamente en las siguientes cuestiones:

a) Establecimiento o modificación del estatuto profesional y del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

b) Determinación de las condiciones de trabajo.

c) Régimen retributivo.

d) Programas de enseñanza y planes de formación de la Guardia Civil.

e) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.

f) Planes de previsión social complementaria.

g) Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y económicos de los Guardias Civiles.

2. Informar, con carácter previo, las disposiciones legales o reglamentarias que se dicten sobre las citadas materias.

3. Conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus causas, sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de

siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo.

4. Analizar y valorar las propuestas y sugerencias planteadas por los Guardias Civiles sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación y sobre los aspectos sociales que les afecten.

5. Colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

6. Participar en la gestión de obras sociales para el personal, cuando así lo determine la normativa correspondiente

7. Recibir información trimestral sobre política de personal.

8. Las demás que le atribuyan las leyes y disposiciones generales.

De este modo, las funciones a desarrollar por el Consejo de la Guardia Civil, en cuanto órgano colegiado creado “con el fin de mejorar las condiciones profesionales de su integrantes, así como el funcionamiento del Instituto” (artículo 52 de la Ley Orgánica 11/2007) tienen un alcance general, se refieren a cuestiones generales que afecten a las condiciones profesionales o al funcionamiento del Instituto que no requerirían, en principio, el acceso a los datos de carácter personal que puedan figurar en la documentación a la que tengan acceso. No obstante, como excepción, en el supuesto del informe preceptivo del artículo 64 de la Ley Orgánica 12/2007, sí podría resultar necesario acceder a los datos personales que figuren en el expediente disciplinario.

Por todo ello, esta Agencia considera que el acceso a la información, en el supuesto en que contenga datos personales, deberá realizarse previa disociación de los mismos. De este modo, al haberse procedido a su anonimización, no resultaría de aplicación la normativa de protección de datos personales al tratamiento ulterior de dicha información.

En el caso del artículo 64 de la Ley Orgánica 12/2007, así como en cualquier otro caso en el que, excepcionalmente, se considere necesario para el ejercicio de sus funciones por parte de los miembros del Consejo de la Guardia Civil, el acceso a los datos personales deberá limitarse a los estrictamente necesarios para el adecuado desarrollo de dicha función, quedando protegidos por el deber de reserva al que hace referencia el artículo 9. 4 del proyecto. Asimismo, dada la finalidad del acceso, a los efectos del buen funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil, el tratamiento de los datos personales debería limitarse a la finalidad para la que se ha concedido el acceso a la información, no pudiendo utilizarse con fines distintos.



En virtud de lo señalado, debería incluirse un apartado específico en el que se haga referencia a los posibles tratamientos de datos personales, incluyendo las garantías señaladas en los apartados anteriores, proponiéndose la siguiente redacción:

**5. Cuando la información contuviera datos de carácter personal el acceso se facilitará, con carácter general, previa disociación de los mismos. En el supuesto contemplado en el artículo 64.1 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, así como en cualquier otro caso en el que, excepcionalmente, se considere necesario el acceso a los datos de carácter personal, el mismo se limitará a los estrictamente necesarios para el desarrollo de sus funciones, sin que puedan ser tratados para una finalidad distinta.**

En todo caso, el tratamiento de los datos de carácter personal se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en su normativa de desarrollo.

## II

Por otro lado, debe hacerse referencia a la posibilidad de grabar las sesiones del Consejo a la que se refiere el artículo 27.2 del proyecto, al regular el acta de la sesión:

2. Podrán grabarse las sesiones que celebre el Consejo. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la secretaria de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

Las grabaciones de las sesiones celebradas y la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos.

3. En ausencia de grabación cualquier miembro del Consejo tendrá derecho a que se incorpore al acta un documento cuyo contenido.

La posibilidad de grabar las sesiones de los órganos colegiados con el objeto de acompañar dicha grabación al acta, fue introducida por el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

**Artículo 18. Actas.**

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

A este respecto, tal y como indicó esta Agencia en su informe 26/2015, en caso de grabación de las actas, los “ficheros” a los que se refiere el precepto contendrán datos de carácter personal relacionados, en particular, con la voz y la imagen de los miembros del órgano, así como con la totalidad de las manifestaciones que los mismos lleven a cabo durante la reunión.

Por este motivo, esta Agencia consideraba necesario que en caso de que quiera considerarse a la grabación parte integrante o anexa del acta, no recogiendo la voz o las imágenes con la exclusiva finalidad de facilitar su preparación, así se debería prever en la norma de funcionamiento del órgano colegiado, tal y como se realiza en el proyecto.

En todo caso, dicho tratamiento de datos personales queda igualmente sujeto a las previsiones del RGPD y la LOPDGDD. En particular, en los casos en los que se proceda a la grabación, deberá informarse a los miembros del



Consejo de la Guardia Civil asistentes, en los términos señalados en el artículo 13 del RGPD, pudiendo suministrarse dicha información *por capas* conforme al artículo 11 de la LOPDGDD. Por ello se propone la siguiente redacción del primer párrafo del apartado dos:

2. Podrán grabarse las sesiones que celebre el Consejo, **previa información a los asistentes en los términos previstos en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679**. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la secretaria de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.